ESPAÑA

INTERVENCIÓN PRONUNCIADA
POR EL DELEGADO DE ESPAÑA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

EN LA SEXTA COMISIÓN
DEL 74 PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS

Tema 75. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos

Nueva York, 14 de octubre de 2019

(Cotejar con intervención definitiva)

STATEMENT BY
THE SPANISH DELEGATE TO THE UNITED NATIONS

AT THE SIXTH COMMITTEE
OF THE 74th SESSION OF THE UN GENERAL ASSEMBLY

Agenda item 75. Responsibility of States for internationally wrongful acts

New York, 14 October 2019

(Unofficial translation. Check against delivery)

MISIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA EN LAS NACIONES UNIDAS
245 EAST 47TH STREET , 36TH FL., NUEVA YORK , N.Y. 10017 TEL. (212) 661-1050

Muchas gracias, **Sr. Presidente,**

Permítame en primer lugar señalar que constituye un honor para mi delegación tomar la palabra precisamente en este punto del programa de trabajo de la Sexta Comisión, pues son muchas las razones que justifican el interés de mi país en el desarrollo de los trabajos de la Asamblea General acerca del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad de Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptado en el mes de agosto de 2001.

Pero todas esas razones se pueden condensar en una sola: el carácter estructural que para el Derecho Internacional Público representa este sector del ordenamiento, el que establece las consecuencias de la infracción por un Estado de cualquier obligación que tiene su origen en una norma de Derecho Internacional Público. Lo que tradicionalmente se conoce como "normas secundarias", claves en la estabilidad y en la certeza de todo sistema jurídico, no solo del Derecho Internacional.

España consideraba entonces, en 2001, ha considerado a lo largo de estos más de 18 años, y sigue considerando ahora, que el carácter estructural del contenido del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de Estado lo hace acreedor a estimular la tarea de codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional que tiene atribuida la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si se me permite, este Proyecto de Artículos y el destino que se le dé por la Asamblea General constituye un símbolo en cierto modo del discurrir actual y futuro de los trabajos de esta Sexta Comisión, hasta tal vez un síntoma de su estado de ánimo.

Sr. Presidente, con esta premisa en mente, España ha seguido con interés el intenso trabajo desarrollado en el seno de esta Asamblea desde que el proyecto de artículos fue aprobado. Por esa razón mi delegación se muestra interesada – tras los sucesivos ángulos con los que esta Comisión ha examinado el Proyecto de Artículos en sucesivas ocasiones, en total 7 con este período de sesiones – en la activación de algunas de las posibilidades que quedaron abiertas en la Resolución 71/133, la última ocasión en que la Asamblea se pronunció sobre las opciones disponibles para este importante trabajo de la Comisión de Derecho Internacional.

España quiere agradecer en este sentido muy especialmente a Brasil, por haber impulsado estos trabajos y este diálogo entre las delegaciones interesadas durante el período entre sesiones, y haber recogido distintas opciones identificadas en este trabajo. También quiere mi delegación reconocer el trabajo intensísimo, y en distintas direcciones y desde distintos ángulos, de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, que se refleja de nuevo en la presentación de los dos últimos informes que dan cuenta del grado de aplicación del Proyecto de Artículos por distintos tribunales y órganos, así como recopilan comentarios y observaciones de Estados al estado actual del Proyecto de Artículos y posibles próximos pasos a seguir.

El parecer de España en este sentido es conocido, mi país se muestra partidario de que el Proyecto aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en 2001 sea sometido a la discusión y aceptación por los Estados, mediante la pertinente convocatoria de una Conferencia de plenipotenciarios. Desde luego, considera que la labor que ha protagonizado la Comisión debe propiciar la adopción de un tratado internacional que garantice una mayor seguridad jurídica en este sector de normas.

Sr. Presidente, aun habiendo considerando cuidadosamente las reservas e inquietudes que este camino puede suscitar a algunos Estados miembros, en clave de riesgos de debilitamiento, o incluso "reapertura" de algunos de los contenidos del Proyecto de Artículos que han encontrado eco en la jurisprudencia de todos los niveles y en la práctica de los Estados, mi delegación estima que no debe desconocerse que el mantenimiento del status quo o la inacción no están exentos de potenciales inquietudes también sobre el desarrollo futuro de este sector del Derecho Internacional. Una de esas inquietudes es la relativa a los posibles efectos indeseados de la aplicación descentralizada de normas que se refieren a las consecuencias para los Estados de todo hecho ilícito.

En este sentido, y desde la misma óptica antes adelantada de estabilidad y certeza para este sector del Derecho Internacional, España considera que la mejor vía para corregir la indeterminación de las consecuencias sustantivas de un hecho ilícito internacional; así como para poner remedio a los aspectos más criticables de la aplicación descentralizada de normas respecto de todo hecho ilícito, es sin duda el desarrollo progresivo de los mecanismos de solución de controversias mediante un tratado.

Así, la inclusión de un sistema de solución de controversias en un tratado regulador de la responsabilidad internacional tendría un alcance general, a salvo otros regímenes convencionales especiales, por lo que regiría respecto de cualquier vulneración de una norma del Derecho internacional. Este es un efecto beneficioso que en el estado actual, con su aplicación descentralizada por tribunales y órganos de diversa naturaleza, condición y propósito, el proyecto de artículos de 2001 no puede desplegar.

España se muestra por lo tanto partidaria del desarrollo progresivo de los mecanismos de solución de controversias en este ámbito, y manifiesta su disposición a aceptar el recurso obligatorio al arbitraje internacional y en su defecto a la Corte Internacional de Justicia, respecto de cualquier controversia que pudiera surgir sobre la interpretación o la aplicación de las disposiciones de un tratado que regule la responsabilidad internacional, que no hayan podido ser resueltas a través de la negociación o de cualquier otro medio de solución de controversias libremente aceptado por las partes en dicha controversia.

En esa hipótesis sin embargo, el Gobierno de España, y en aras de que dicho tratado pudiera alcanzar un mayor número de ratificaciones, podría admitir la formulación de reservas a las disposiciones que regulen el recurso obligatorio al arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia.

Sr. Presidente, en definitiva, España, como Estado miembro de la Unión Europea firmemente comprometido con la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, es partidaria de que a partir del Proyecto aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en 2001, se negocie y adopte un tratado internacional que regule la responsabilidad internacional del Estado. Mi país considera claro el beneficio potencial y difícilmente cuestionable de una mayor seguridad jurídica en este sector de normas y su contribución a la consolidación del imperio del Derecho en las relaciones internacionales.

España considera que los que en esta Sala nos sentamos contamos con los medios para este esfuerzo, y mi país quiere contribuir a ayudar a alcanzar esos beneficios, sin incurrir en los riesgos que algunos legítimamente observan en alterar el estado actual de este sector del Derecho Internacional. Por ello, llamamos a explorar juntos las posibilidades de delimitar adecuadamente los trabajos de la Asamblea sobre este Proyecto de Artículos de 2001, en los términos que se recogen en la Resolución 71/133, y agotar todas las opciones dirigidas a hacer posible la regulación de esta materia, con la voluntad de todos, en un tratado.

De ese modo estaremos más cerca del mejor resultado que con toda seguridad todos los Estados miembros perseguimos en este ámbito: el fomento de la estabilidad y la paz en las relaciones internacionales mediante la regulación convencional de uno de los sectores de normas de mayor importancia para el buen funcionamiento del ordenamiento internacional.

Muchas gracias, **Sr. Presidente**.

Thank you, **Mr. President**,

Allow me first of all to highlight what an honor it is for my delegation to take the floor precisely under this item within the Programme of Work of this Sixth Committee, as there are many different reasons that justify my country's interest in the conduct of the work of the General Assembly on the Draft Articles of the International Law Commission on responsibility of States for internationally wrongful acts, adopted in August 2001.

But all of these reasons can be condensed into a single one: the structural character that this sector of law represents for Public International Law, as this set of norms establishes the consequences of the breach by a State of any obligation that has its origin in a norm of Public International Law. What is traditionally known as "secondary norms", keys in the stability and certainty of any legal system, not only of International Law.

Spain considered back then, in 2001, has consistently considered over these more than 18 years, and continues to consider now, that the structural character of the content of the Draft Articles on State Responsibility amounts as to the best incentive for the pursuance of the task of codification and progressive development of International Law that is attributed to the General Assembly of the United Nations. If I may say so, this Draft Articles and the fate assigned to it by the General Assembly constitute a symbol, in a sense, of the current and future course of the work of this Sixth Committee, perhaps even a symptom of its state of mind.

Mr. President, with this premise in mind, Spain has followed very closely the intense work carried out by this Committee of the General Assembly since the Draft Articles were adopted. It is for this reason that my delegation shows a very particular interest - after the different angles from which this Commission has examined the Draft Articles on successive occasions, 7 in total with this session - in the activation of some of the the possibilities left open by resolution 71/133, the last occasion on which this Assembly pronounced itself on the options available to take action on this important work of the International Law Commission.

The position of Spain in this respect is well known: my country is of the view that the Draft Articles adopted by the International Law Commission should be the object of discussion and acceptance by Member States through the convening, as appropriate, the corresponding Diplomatic Conference of Plenipotentiaries. And indeed, my country is of the view that the work completed by the International Legal Commission deserves the adoption of an international convention that will ensure greater legal certainty in this area of norms.

In this regard, Spain would like to thank Brazil in particular for having promoted this work and this dialogue among interested delegations during the intersessional period, and for having taken up various options identified in this work. My delegation would also like to acknowledge the intense work, in different directions and from different angles, of the Office of Legal Affairs of the Secretariat, which is reflected once again in the presentation of the last two reports that give an account on the degree of application of the Draft Articles by different courts and tribunals, and bodies, as well as provide comments and observations formulated by States on the current status of the Draft Articles and possible next steps to follow.

Mr. President, while carefully considering the reservations and concerns that this path may raise for some Member States, in terms of risks of weakening, or even "reopening" some of the contents of the Draft Articles that have already found an echo in the jurisprudence at all levels and in the practice of States, my delegation believes that it should not be ignored that the maintenance of the status quo or inaction are not exempt from potential concerns also about the future development of this sector of International Law. One such concern relates to the possible undesired effects of a decentralized application of rules that relate to the consequences for States arising from internationally wrongful acts.

In this sense, and from the same viewpoint previously advanced on stability and certainty for this sector of International Law, Spain believes that the best way to correct both the lack of determination of the consequences of an international wrongful act; as well as for the purposes of offering a remedy to the most objectionable effects of a decentralized implementation of this type of rules, is undoubtedly the progressive development of dispute settlement mechanisms by means of a treaty.

Thus, the inclusion of a dispute settlement system in a treaty regulating States Responsibility would have a general scope, while preserving other special treaty regimes, and would therefore be applicable to any breach of a rule of international law. This is a beneficial effect which in the present state, with its decentralized application by courts and organs of various natures, condition and purpose, the 2001 Draft Articles cannot attain.

Spain is therefore in favor of the progressive development of dispute settlement mechanisms in this area, and expresses its willingness to accept the mandatory recourse to international arbitration and in particular to international arbitration to the International Court of Justice, in respect of any dispute arising on the interpretation or application of the provisions of a treaty governing international responsibility which could not be settled by negotiation or by any other means of dispute settlement freely accepted by the parties to the dispute.

In such a scenario, however, the Government of Spain, with a view to achieving a greater number of ratifications for such a treaty, would be ready to accept the formulation of reservations to the provisions governing compulsory recourse to international arbitration or to the International Court of Justice.

Mr. President, Spain, as a Member State of the European Union firmly committed to democracy, the Rule of Law and respect for Human Rights, is in supportive of the idea that, building on the content of the Draft Articles adopted by the International Law Commission in 2001, an international treaty regulating State Responsibility should be negotiated and adopted. My country believes in the clear potential benefit that the achievement of an indisputable greater legal certainty in this area of international norms would have, as a valuable contribution to the consolidation of the Rule of Law within international relations.

Spain considers that those of us who sit in this Chamber have sufficient means and tools for this effort, thus my country wants to contribute to helping to achieve these benefits, without incurring the risks that some delegations legitimately see in bringing a change to the current status of this sector of International Law. For this reason, we make a call to explore together the possibilities of adequately delimiting the work of the Assembly on this Draft Articles of 2001, in line with the terms set forth in Resolution 71/133, and to exhaust all options aimed at enabling the regulation of this subject matter, in a consensual way, by a treaty.

By doing so, we will be closer to the best result that we all Member States are certainly pursuing in this area: the promotion of stability and peace in international relations through the conventional regulation of one of the sectors of rules of major importance for the proper functioning of the international order.

I thank you, **Mr. President.**